

El Gobierno del PP cerró el Júcar-Vinalopó a los 4 días de perder la moción de censura

La empresa pública Acuamed sacó del consejo del martes la aprobación del envío de un «riego de socorro» de 6 hm³ a la provincia

F. J. Benito | | 10.06.2018 | 23:57

La última de la exministra de Agricultura, **Isabel García-Tejerina**. El consejo de administración de la empresa pública Acuamed, propietaria del trasvase, sacó el martes pasado del orden del día la aprobación anual del único envío de agua que reciben los agricultores del Vinalopó y l'Alacantí por el **Júcar-Vinalopó**. Seis hectómetros cúbicos considerados como un «riego de socorro» para los agricultores de varios municipios, entre ellos Aspe y Elche, que no cuentan con otro tipo de recursos.



Cultivos de uva de mesa del Vinalopó, a los que debía haber llegado el trasvase. **ERNESTO SÁNCHEZ**

Fotos de la noticia

El hecho se producía tan solo cuatro días después de que el gobierno de Mariano Rajoy saltara por los aires al aprobarse la moción de censura planteada por el PSOE. En la práctica, la **anulación** del envío de los 6 hm³; de agua para regadío supone el cierre temporal del trasvase, porque tampoco se cuenta con el convenio para regular el trasvase de 20 hm³; al algo que se llevaba negociando desde hace más de dos años entre el Ministerio de Agricultura y los regantes y que García-Tejerina dio por hecho durante el congreso nacional de regantes celebrado en mayo en Torrevieja.

El diputado autonómico del PSPV-PSOE, David Cerdán, acusó ayer al PP y al ex gobierno de Mariano Rajoy de «deslealtad y juego sucio» contra la provincia de Alicante, y en concreto con los agricultores de las comarcas del Vinalopó y los regantes de Elche. « Esto no puede ser casualidad, sino un claro gesto de **mala fe**, de cómo se utiliza a los ciudadanos para hacer política de la peor, de la más sucia, secuestrando los intereses de sectores completos», acusó el portavoz socialista de Medio Ambiente en las Cortes Valencianas.

La pelota queda ahora en el nuevo **Gobierno del PSOE**, que en el tema del trasvase Júcar-Vinalopó tampoco dio nunca muestras en su anterior etapa de estar junto a los regantes de la provincia. Cambió la toma, encareció el proyecto en 200 millones de euros y siempre dio prioridad a los regantes de Valencia.

La repentina salida del Gobierno de Mariano Rajoy y sus ministros ha dejado en el limbo, por otro lado, tres proyectos clave para las infraestructuras de la provincia, y un cuarto, el fallido trasvase Júcar-Vinalopó cuya salida adelante depende de la **nueva ministra** para la Transición Ecológica, **Teresa Ribera**, a quien algunos le han puesto ya la etiqueta de antitrasvasista. En total, unos 800 millones de euros que hoy están en el aire. Dos son proyectos viarios (accesos al aeropuerto, aún en fase de expropiación de los terrenos, y la ampliación de la autovía Alicante-Murcia, que se decidió realizar con base en la colaboración de la iniciativa privada), y uno ferroviario, el convenio Fomento-Renfe para el impulso de las cercanías entre Alicante y Villena.

El cuarto, hídrico. Se trata del convenio para la gestión del **trasvase Júcar-Vinalopó**, que la exministra Isabel García Tejerina ha dejado sin cerrar, incapaz de llegar a plasmar negro sobre blanco un convenio tras más de dos años de negociaciones con los regantes alicantinos. Retraso al que se añade también lo que pueda ocurrir ahora con el trasvase **Tajo-Segura**, ya que el PSOE ya se mostró abiertamente antitrasvasista en su última etapa en el Gobierno y en Castilla-La Mancha gobiernan los socialistas con el apoyo de Podemos. Ambas formaciones se oponen a la continuidad de que siga llegando agua del Tajo a la provincia de Alicante. Trasvase que quedó garantizado con el PP, pese a sus mínimos, por el Memorándum que subió la reserva en los embalses de Entrepeñas y Buendía a los 400 hm³; y que ahora corre el riesgo de saltar por los aires. El cambio climático aprieta y en Madrid, tanto con el PP, que al final siguió las directrices del PSOE, están convencidos de que la solución final pasa por aumentar el protagonismo de las desalinizadoras.

En Fomento, lo cierto es que el balance de estos tres años de legislatura con Íñigo de la Serna a la cabeza en el Ministerio no han sido de los peores para Alicante. De la Serna, presionado por la campaña de la Asociación Valenciana de Empresarios, ha puesto en velocidad de crucero la ejecución de las obras del **Corredor Mediterráneo**, y ya nadie duda de que en dos años el viaje en tren entre Alicante a València se podrá hacer en una hora y en dos más en Barcelona.

Todo dependerá ahora, no obstante, de las decisiones que tome el sucesor de De la Serna, el valenciano José Luis Ábalos, que llega por tanto con una presión añadida. La historia juega a favor del retraso porque, tradicionalmente, en España cualquier ministro lo primero que hace al llegar al Gobierno es deshacer o cuestionar lo hecho por su predecesor.

En materia **ferroviaria** los retos del Ejecutivo de Pedro Sánchez son claros. Terminar las obras del AVE entre Madrid y Elche (difícil será que se pare), el acceso en tren al aeropuerto (80 millones de euros), poner en marcha la Red de Cercanías entre Alicante y Villena (actuación que le dejó hecha De la Serna a falta de un par de firmas) y reactivar el tren de la Costa, algo que sigue pendiente desde la época de Blanco.

A nivel **viario** la duplicación de los carriles de la N-338 para dotar al aeropuerto de una carretera de acceso digna para una terminal por la que pasan cerca de 14 millones de pasajeros está aprobada, consignada presupuestariamente pero a falta, todavía, de que el Ministerio de Fomento cuente con todos

los terrenos. O, lo que es lo mismo, cerrar las expropiaciones. De la Serna prometió que pondría la primera piedra en julio. Falta un mes.

Otro de los asuntos cruciales para la provincia que dejó encauzado el ministro De la Serna pero que hoy está rodeado de incógnitas -la colaboración público/privada no está en el «adn» de los socialistas- es el proyecto para duplicar la autovía A-7 con tres carriles en cada sentido entre Crevillent y Murcia. Un proyecto con un coste cercano a los 600 millones de euros que debe ejecutar la iniciativa privada (el Gobierno paga después) y que es candidato, ahora, a una revisión por el nuevo Ejecutivo. Sin dejar de lado, por supuesto, la necesaria remodelación de la A-31 en el tramo Alicante-Villena y en los accesos a la Universidad.

Y si el problema de las carreteras y el ferrocarril es importante, no lo es menos el del agua con dos **trasvases** heridos de muerte. El Júcar-Vinalopó -doscientos millones de euros de sobrecoste debido al cambio de toma en decisión unilateral del PSOE-, y el Tajo-Segura, cuyo futuro está en el aire. El PP lo mantuvo casi a regañadientes y el PSOE hace tiempo que apuesta por cerrarlo por mucho que en público sus interlocutores intenten demostrar lo contrario. El presidente Pedro Sánchez se metió en un buen lío hace un par de meses, cuando era el candidato Sánchez. Cargó el Albacete contra el trasvase Tajo-Segura y dos semanas después dijo lo contrario en Murcia.